

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



**JUZGADO OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ D.C.**

ACCIÓN DE TUTELA

RADICADO: 11001-41-05-008-2023-00450-00

ACCIONANTE: YHONATAN ANDRÉS PIL BELTRÁN

ACCIONADA: ASESORES AR S.A.S.

SENTENCIA

En Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023), procede este Despacho Judicial a resolver la acción de tutela impetrada por **YHONATAN ANDRÉS FELIPE PIL BELTRÁN**, quien solicita el amparo del derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por **ASESORES AR S.A.S.**

RESEÑA FÁCTICA

Manifiesta el accionante que el 25 de abril de 2023 radicó un derecho de petición ante la accionada.

Que el 14 de mayo de 2023 recibió respuesta, pero no le fue aportado el audio donde *“supuestamente autorizó los descuentos en (su) nómina (...)”*.

Por lo anterior, solicita se ampare su derecho fundamental y, en consecuencia, se ordene a la accionada dar respuesta a sus peticiones y remitir una copia del audio solicitado.

CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA

ASESORES AR S.A.S.:

La accionada allegó contestación el 31 de mayo de 2023, en la que manifiesta que el 14 de mayo de 2023 dio respuesta a la petición del accionante.

Que en la respuesta se le indicó al accionante que, si su intención era “*obtener una copia del audio de su afiliación*”, debía remitir la solicitud al correo electrónico: operativo@asesoresar.co

Que el 31 de mayo de 2023 envió nuevamente la respuesta al derecho de petición del accionante, junto con los anexos, entre los cuales se encuentra el audio de la afiliación.

Por lo anterior, solicita se declare una carencia actual de objeto por hecho superado.

CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURÍDICO:

En concordancia con los hechos que fundamentan la acción de tutela, corresponde al Despacho responder el siguiente problema jurídico: ¿La sociedad **ASESORES AR S.A.S.** vulneró el derecho fundamental de petición del señor **YHONATAN ANDRÉS PIL BELTRÁN**, al no haberle dado respuesta a su petición del 25 de abril de 2023?

MARCO NORMATIVO

Conforme el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un instrumento judicial de carácter constitucional, subsidiario, residual y autónomo, dirigido a facilitar y permitir el control de los actos u omisiones de todas las autoridades públicas y excepcionalmente de los particulares cuando estos vulneren derechos fundamentales.

Esta acción constitucional puede ser interpuesta por cualquier persona, a fin de obtener la pronta y efectiva defensa de los derechos fundamentales cuando ello resulte urgente para evitar un perjuicio irremediable, o cuando no exista otro medio de defensa judicial.

DERECHO DE PETICIÓN

El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. En desarrollo del Texto Superior, fue expedida la Ley 1755 de 2015 “*Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”, una norma de carácter estatutario, que establece la regulación integral de este derecho fundamental.

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional se ha referido al derecho de petición, precisando que su contenido esencial comprende: (i) la posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo; (iii) una respuesta de fondo, lo que implica una obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados y excluyendo fórmulas evasivas o elusivas¹.

Conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el ejercicio del derecho de petición en Colombia está regido por las siguientes reglas y elementos de aplicación²:

“1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

2) Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política.

*3) La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser **oportuna**, es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la ley; (ii) la respuesta debe **resolver de fondo** el asunto solicitado. Además de ello, debe ser **clara, precisa y congruente** con lo solicitado; y (iii) debe **ser puesta en conocimiento** del peticionario.*

4) La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita.

5) El derecho de petición fue inicialmente dispuesto para las actuaciones ante las autoridades públicas, pero la Constitución de 1991 lo extendió a las organizaciones privadas y en general, a los particulares.

6) Durante la vigencia del Decreto 01 de 1984 el término para resolver las peticiones formuladas fue el señalado por el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, que señalaba un término de quince (15) días para resolver, y en los casos en que no pudiese darse la respuesta en ese lapso, entonces la autoridad pública debía explicar los motivos de la imposibilidad, señalando además el término en el que sería dada la contestación.

7) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. En sentido concurrente, el silencio administrativo es prueba de la violación del derecho de petición.

8) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea el derecho de petición no la exonera del deber de responder.

9) La presentación de una petición hace surgir en la entidad, la obligación de notificar la respuesta al interesado”.

¹ Sentencia T-251 de 2008. Citada en las Sentencias T-487 de 2017 y T-077 de 2018.

² Sentencias T-296 de 1997, T-150 de 1998, SU-166 de 1999, T- 219 de 2001, T-249 de 2001 T-1009 de 2001, T-1160 A de 2001, T-1089 de 2001, SU-975 de 2003, T-455 de 2014.

Así entonces, la efectividad y el respeto por el derecho de petición, se encuentran subordinados a que la autoridad requerida, o el particular según se trate, emitan una respuesta de fondo, clara, congruente, oportuna y con una notificación eficaz.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el derecho de petición supone un resultado que se manifiesta en la obtención de la pronta resolución de la petición. Sin embargo, se debe aclarar, que el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa³.

En síntesis, la garantía real del derecho de petición radica en cabeza de la administración o del particular una responsabilidad especial, sujeta a cada uno de los elementos que informan su núcleo esencial. La obligación no cesa con la simple resolución del derecho de petición elevado por un ciudadano, es necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del asunto; que esté dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que su oportuna respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, sin que pueda tenerse como real una contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o entidad de quien se solicita la información.

Es importante señalar, que el artículo 5° del Decreto 491 de 2020, amplió los términos para resolver los derechos de petición, pasando de 15 a 30 días hábiles mientras dure el Estado de Emergencia Sanitaria. La Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de este artículo en la Sentencia C-242 de 2020, declarándolo exequible condicionado, bajo el entendido de que la ampliación de términos no solo es aplicable a las autoridades públicas, sino que también se hace extensible a los particulares.

Valga señalar, que si bien la Ley 2207 del 17 de mayo de 2022 derogó el artículo 5° del Decreto 491 de 2020, en criterio del Despacho esta última norma debe seguirse aplicando a las peticiones que se hayan radicado durante su vigencia; es decir, que los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 se reestablecerán, pero únicamente para las peticiones radicadas a partir del 18 de mayo de 2022.

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela, en principio, *“pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que*

³ Sentencia T-146 de 2012.

*genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo*⁴. En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz⁵.

En efecto, si lo que el amparo constitucional busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y *“previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”*⁶. En otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela.

En ese orden, la Corte Constitucional ha desarrollado la teoría de la carencia actual de objeto como una alternativa para que los pronunciamientos no se tornen inocuos, y ha aclarado que el fenómeno se produce cuando ocurren dos situaciones específicas: (i) el hecho superado y (ii) el daño consumado.

Con relación a la categoría de carencia actual de objeto por hecho superado, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 lo reglamenta en los siguientes términos: *“Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”*.

La Corte Constitucional ha interpretado la disposición precitada en el sentido de que la carencia actual de objeto por hecho superado tiene lugar cuando desaparece la afectación al derecho fundamental invocado⁷. En efecto, si la acción de tutela es el mecanismo eficaz para la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, cuando la perturbación que dio origen a la acción desaparece o es superada, el peticionario carece de interés jurídico ya que dejan de existir el sentido y objeto del amparo.

Luego, al desaparecer el hecho que presuntamente amenaza o vulnera los derechos de un ciudadano, carece de sentido que el juez profiera órdenes que no conducen a la protección de los derechos de las personas. Así, cuando el hecho vulnerador desaparece se extingue el objeto actual del pronunciamiento, haciendo inocuo un fallo de fondo⁸.

⁴ Sentencia T-970 de 2014.

⁵ Sentencias T-588A de 2014, T-653 de 2013, T-856 de 2012, T-905 de 2011, T-622 de 2010, T-634 de 2009, T-449 de 2008, T-267 de 2008, T-167 de 2008, T-856 de 2007 y T-253 de 2004.

⁶ Sentencia T-168 de 2008.

⁷ Sentencias T-267 de 2008, T-576 de 2008, T-091 de 2009, T-927 de 2013, T-098 de 2016, T-378 de 2016 y T-218 de 2017.

⁸ Sentencia T-070 de 2018.

En síntesis, el hecho superado significa la observancia de las pretensiones del actor a partir de una conducta desplegada por el transgresor. En otras palabras, la omisión o acción reprochada por el accionante, ya fue superada por parte del accionado.

Cuando se presenta ese fenómeno, la obligación del juez de tutela no es la de pronunciarse de fondo, solo cuando estime necesario *“hacer observaciones sobre los hechos que originaron la acción de tutela, con el propósito de resaltar su falta de conformidad constitucional, condenar su ocurrencia y conminar a que se adopten las medidas necesarias para evitar su repetición, so pena de las sanciones pertinentes⁹. De cualquier modo, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que en la sentencia se demuestre la reparación del derecho antes de la aprobación del fallo, es decir, que se demuestre el hecho superado^{10”11}.*

CASO CONCRETO

Partiendo de las consideraciones expuestas y de la documental allegada, observa el Despacho que el señor **YHONATAN ANDRÉS PIL BELTRÁN** elevó un derecho de petición ante **ASESORES AR S.A.S.**, en el que solicitó lo siguiente¹²:

“I. Solicito respetuosamente la terminación del supuesto vínculo que tengo con ustedes, extinguiendo todo tipo de obligación con su compañía.

II. Como consecuencia de ello, requiero que cese cualquier tipo de descuento de la cuota mensual que se refleja en mi desprendible de nómina a nombre de su compañía.

III. Que se otorgue un certificado de PAZ Y SALVO entre el suscrito y su empresa.

IV. Solicito se aporte una relación detallada de los descuentos realizados por su entidad en mi desprendible de nómina donde conste mes, año y valor de la cuota descontada.

V. Se aporte copia de la totalidad de documentos que autorizaron los descuentos en mi nómina a nombre de su entidad.

VI. En caso tal de que no se cuente con los documentos enunciados en el numeral anterior, solicito se aporte copia del audio donde supuestamente autorizo los descuentos en mi nómina a nombre de su entidad.

VII. En caso de una respuesta negativa solicito se me informe la razón con su respectivo fundamento jurídico.

VIII. Requiero se me informe la fecha exacta o el tiempo estimado en que ya no se reflejarán más los descuentos en mi nómina a nombre de su compañía.”

Así mismo, el accionante aportó la respuesta que le brindó la accionada el 14 de mayo de 2023, pero dice que la misma no fue completa, por cuanto no le fue suministrada la copia del audio donde *“supuestamente autorizó los descuentos en nómina”*.

9 Sentencia T-890 de 2013.

10 Sentencias SU-225 de 2013, T-856 de 2012, T-035 de 2011, T-1027 de 2010, T-170 de 2009 y T-515 de 2007.

11 Sentencia T-970 de 2014.

12 Páginas 06 a 07 del archivo pdf 01AcciónTutela

La accionada **ASESORES AR S.A.S.**, al contestar la acción de tutela señaló que, el 14 de mayo de 2023 dio respuesta a la petición del accionante, en la cual le manifestó que si su intención era “*obtener una copia del audio de su afiliación (debía) remitir dicha petición al correo operativo@asesoresar.co*”.

Igualmente, señaló que, el 31 de mayo de 2023 envió nuevamente la respuesta a la petición, con los anexos, entre los cuales se encuentra el audio de la afiliación. En sustento, aportó una copia de la respuesta que brindó en los siguientes términos¹³:

“En atención a su solicitud, le informamos lo siguiente:

(Punto 1)

RESPUESTA: En atención a su solicitud de desvinculación, le informamos que se procedió a CANCELAR su afiliación.

(Punto 2)

RESPUESTA: La Aseguradora que respalda nuestros servicios tiene un trámite interno de aproximadamente dos (02) meses contados a partir de la notificación de su desvinculación y cuyo procedimiento se efectúa simultáneamente con el área de nómina del Ejército para el cese del descuento. Por tal motivo, lo(a) invitamos a que una vez transcurrido el tiempo anteriormente señalado verifique en su desprendible de nómina y confirme su total desvinculación con la Empresa.

(Punto 3)

RESPUESTA: Adicionalmente y en documento(s) anexo(s) se adjunta a la presente respuesta Paz y Salvo a nombre del peticionario.

(Punto 4)

RESPUESTA: A la fecha sólo se ha efectuado un descuento correspondiente al mes de ABRIL de 2023 por un valor de treinta y ocho mil novecientos pesos (\$38.900).

(Punto 5)

RESPUESTA: Cabe recordar que el contrato verbal es perfectamente válido en Colombia, excepto en los casos en los que la ley obligue a realizarlo en forma escrita y para el caso específico de las ventas a distancia la Ley no exige tal solemnidad. Así las cosas, las afiliaciones se realizan por medio de llamadas telefónicas, modalidad consagrada y autorizada por la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 1499 de 2014. Y en el Decreto 1499 de 2014 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo “Por el cual se reglamentan las ventas que utilizan métodos no tradicionales y las ventas a distancia”. Teniendo en cuenta lo anterior, se indica que el contrato celebrado entre las partes fue de manera verbal por medio de llamada grabada y monitoreada en donde el señor(a) PIL BELTRAN autorizó el tratamiento de sus datos personales de manera previa, expresa e informada y adicionalmente aceptó los términos del contrato y autorizó el respectivo descuento. Si desea obtener una copia del audio de su afiliación, sírvase remitir dicha petición al correo operativo@asesoresar.co.

(Punto 6)

RESPUESTA: ASESORES AR sí posee los soportes de su afiliación por lo cual se omitirá referirse a esta petición.

(Punto 7)

RESPUESTA: ASESORES AR se pronuncia sobre cada uno de los aspectos de la solicitud efectuada y procedió a notificar la respuesta dentro del término legal establecido al correo indicado por el peticionario.

¹³ Páginas 06 a 08 del Archivo pdf 06ContestacionARS.A.S450

(Punto 8)

RESPUESTA: El vínculo contractual con ASESORES AR culminará junto con los descuentos en su nómina una vez culmine el término de dos (02) meses de que trata la respuesta dada a su segunda petición."

Con base en lo anterior, el Despacho procede a analizar si la respuesta brindada por la accionada cumple los requisitos señalados por la jurisprudencia constitucional para considerar satisfecho el derecho de petición.

Frente a la **notificación** de la respuesta, se tiene que ésta fue remitida al correo electrónico: pilandres36@gmail.com¹⁴ el cual coincide con el señalado por la parte actora en el acápite de notificaciones de la acción de tutela y del derecho de petición.

En cuanto a la **oportunidad** de la respuesta, se tiene que, aunque no se generó dentro del término de 15 días hábiles previsto en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, fue emitida y notificada durante el transcurso de esta acción de tutela.

Ahora bien, respecto del requisito relativo a resolver de **fondo** y de manera **congruente y completa** lo solicitado, la respuesta lo cumple por las siguientes razones:

En el **punto 1** de la petición, el accionante solicitó la terminación del vínculo con la entidad. Frente a ello, la accionada le manifestó que había procedido a cancelar su afiliación.

En el **punto 2** de la petición, el accionante solicitó la suspensión de los descuentos de la cuota mensual sobre su nómina. Frente a ello, la accionada le indicó que la aseguradora que respalda sus servicios, tiene un trámite interno de 2 meses, contados a partir de su desvinculación, para el cese de los descuentos y que, por tanto, lo invitaban a que luego de transcurrido ese tiempo, validara en su desprendible de pago la desvinculación total.

En el **punto 3** de la petición, el accionante solicitó le fuera otorgado un paz y salvo. Frente a ello, la accionada le aportó el paz y salvo emitido el 14 de mayo de 2023.¹⁵

En el **punto 4** de la petición, el accionante solicitó una relación detallada de los descuentos que le fueron realizados a su nómina. Frente a ello, la accionada le precisó que a la fecha solo le habían realizado un descuento por valor de \$38.900.

¹⁴ Página 10 ibídem

¹⁵ Página 09 ibídem

En el **punto 5** de la petición, el accionante solicitó los documentos en los cuales autorizó los descuentos a su nómina. Frente a ello, la accionada le manifestó que el contrato se celebró de manera verbal, por medio de llamada telefónica y que, si deseaba obtener una copia del audio de la afiliación, debía remitir la solicitud al correo electrónico operativo@asesoresar.co.

En el **punto 6** de la petición, el accionante solicitó una copia del audio por medio del cual autorizó los descuentos. Frente a ello, la accionada le aportó el audio de la afiliación.¹⁶

En el **punto 7** de la petición, el accionante solicitó que en caso de que la respuesta a las peticiones fuera negativa, se le dijera el fundamento jurídico. Frente a ello, la accionada le manifestó que se ha pronunciado favorablemente sobre cada solicitud.

En el **punto 8** de la petición, el accionante solicitó le fuera informado el tiempo en el cual le dejarían de realizar los descuentos a su nómina. Frente a ello, la accionada le manifestó que el vínculo contractual, así como los descuentos, culminarían en el término de 2 meses.

Bajo tal panorama, considera el Despacho que la respuesta brindada por **ASESORES AR S.A.S.** al derecho de petición presentado por el señor **YHONATAN ANDRÉS PIL BELTRÁN**, cumple los requisitos señalados por la jurisprudencia constitucional para tener por satisfecha esa garantía *iusfundamental*, pues atendió de fondo el asunto y además fue debidamente notificada.

En este punto es menester recordar, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, que el derecho fundamental de petición se satisface con una respuesta oportuna, concreta, clara y congruente, lo que no equivale a sostener que la misma deba acceder favorablemente a lo solicitado, pues lo que se exige es que su contenido cumpla los requisitos mencionados, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo¹⁷.

Por lo tanto, el hecho de que la respuesta no colme el interés del peticionario no afecta el derecho fundamental de petición, pues su núcleo esencial no se contrae a que se otorgue una respuesta que acoja los pedimentos formulados, sino a que se otorgue una respuesta que resuelva de fondo el asunto solicitado. Si la respuesta no accede a las pretensiones, es un asunto ajeno a la acción de tutela que deberá resolverse a través de los mecanismos ordinarios.

¹⁶ Página 10 ibídem y archivo 07AnexoContestaciónArSAS

¹⁷ Sentencia T-077 de 2018, T-487 de 2017, T-455 de 2014, entre otras.

En consecuencia, lo que era objeto de vulneración del derecho fundamental de petición fue superado, y, por lo tanto, pierde efecto la presente acción de tutela por lo que deberá declararse el **hecho superado**.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO OCTAVO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley:

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por **HECHO SUPERADO** en la acción de tutela de **YHONATAN ANDRÉS PIL BELTRÁN** en contra de **ASESORES AR S.A.S.**, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más eficaz y expedito, advirtiéndoles que cuentan con el término de tres (3) días hábiles para impugnar esta providencia, contados a partir del día siguiente de su notificación.

Por motivos de salud pública, y en acatamiento de las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, la impugnación deberá ser remitida al email: j08lpcbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

TERCERO: En caso que la presente sentencia no sea impugnada, por Secretaría remítase el expediente a la Corte Constitucional para que surta el trámite eventual de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


DIANA FERNANDA ERASSO FUERTES
JUEZ